



embargo, Compensar Salud no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. Recuerde que la interceptación y substracción de esta comunicación está sujeto a sanciones penales correspondientes (ley 1273 del 2009). Recordemos que todos debemos aportar al cumplimiento de la ley 1581 del 2012.

Señores

**JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS**

Atn. Dra. **ELBA SOFÍA CASTRO ABUABARA**

j03cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

**REF.:                    \*\*RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA\*\***

**PROCESO:**            13001400300320230064600

**DEMANDANTE:**    MARIA JOSE SAUMETH HERRERA

**DEMANDADOS:**    COMPENSAR EPS, PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. PROBOCA S.A.  
Y RICARDO LIENDO HERRERA

**SANDRA MÓNICA BAUTISTA GUTIÉRREZ**, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.967.033 expedida en Bogotá D.C., titular de la Tarjeta Profesional número 154.370 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderada de la entidad denominada **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**, identificada con NIT 860066942-7, representada legalmente por el doctor LUIS ANDRÉS PENAGOS VILLEGAS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. e identificado con la cédula de ciudadanía número 71.724.156 expedida en Medellín (Antioquia), entidad demandada en el proceso de la referencia, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. en la Avenida 68 No. 49 A – 47, en ejercicio del poder que legalmente me fue otorgado a través de Escritura Pública 12913 del 10 de diciembre de 2015 ante la Notaría Treinta y Ocho (38) del Círculo de Bogotá D.C. que se allega con el presente escrito, por medio del presente procedo a **presentar recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda calendado 24 de agosto de 2023**, el cual fundamento en los siguientes:

## **I. ARGUMENTOS**

1.1 El artículo 90<sup>1</sup> del Código General del Proceso determina los casos en los cuales se inadmitirá la demanda. Así pues, establece que la demanda estará inmersa en esta causal cuando *“no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad”*.

1.2 Por otra parte, el parágrafo primero del artículo 590 del estatuto procesal dispone que, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, no será necesario acreditar ante el juez el agotamiento de la conciliación judicial. Sin embargo, en el numeral segundo del mismo artículo se indica que para la procedencia de dichas medidas cautelares el demandante deberá prestar caución del veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda.

1.3 A su turno, el artículo 71 de la Ley 2220 de 2022, dispone:

*“ARTÍCULO 71. Inadmisión de la demanda judicial. Además de las causales establecidas en la ley, el juez de conocimiento inadmitirá la demanda cuando no se acredite que se agotó la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, requisito que podrá ser aportado dentro del término para subsanar la demanda, so pena de rechazo.”*

<sup>1</sup> (...)Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisile la demanda solo en los siguientes casos:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.

4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.

5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.

6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.

7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. (...)

1.4 En el caso que aquí nos convoca, se presentó una demanda con solicitud de medida cautelar de “embargo y secuestro del establecimiento comercial HOSPITAL PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. PROBOCA S.A NIT:900.279.660-4 identificado con matrícula No. 09-258293- 02, ubicado CRA 5 # 6 - 49 BARRIO CASTILLO GRANDE”, de manera tal que la demandante no se viera en la obligación de acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad mediante la celebración de la conciliación extrajudicial. Sin embargo, con la solicitud de la medida cautelar no se remitió la caución en mención.

1.5 Sobre el particular es necesario indicar, que para que opere dicha exoneración de agotamiento de requisito de procedibilidad, no basta con la mera solicitud de medidas cautelares, pues la norma es clara al indicar que para que la petición se acompañe a la norma deberá presentarse la caución, pues de lo contrario es una solicitud vacía o sin contenido.

1.6 Un entender diferente de la norma, permitiría que la demandante despoje de los fundamentos constitucionales a la institución de la conciliación extrajudicial, y en su lugar, para evadirse de ella, presente demandas con solicitudes de medidas cautelares que nunca se decretarán y practicarán porque nunca se prestará sobre ellas una caución, máxime, si se tiene en cuenta que en todo caso, el juez de conocimiento avala su conducta otorgándoles la admisión de la demanda.

1.7 Al respecto el Tribunal Superior de Cali, en sentencia de 26 de julio de 2021 dictada por el M.P. Dr. Carlos Alberto Romero Sánchez determinó que:

“(…)

*2.- Bajo la óptica de lo expuesto, evidencia la Sala Unitaria que la decisión de instancia debe confirmarse, pues como viene de verse la exigencia del requisito de procedibilidad, únicamente se exime ante la concurrencia de condiciones especiales que permiten acudir directamente a la jurisdicción, sin que en el presente caso se configure alguna de aquellas.*

*Y lo anterior es así, debido a que **si bien no se desconoce que la parte demandante al formular la demanda solicitó el decreto de diferentes medidas cautelares -que, en principio, la relevarían de agotar el aludido presupuesto de procedibilidad- lo cierto es que aquel eximente no se encuentra acreditado, pues al ser requerida para aportar la caución respectiva.....***

*En ese sentido, evidente resulta que al no lograrse la materialización de las aludidas cautelas, agotar la conciliación se mostraba imperativo, comoquiera que “lejos de desconocer, suspender o impedir el acceso a la administración de justicia, la conciliación extrajudicial como requisito previo es una. Ahora bien, **además de lo anterior, cumple señalar que desde la formulación de la demanda, la parte actora, quien actúa a través de apoderado judicial, al determinar sus pretensiones anticipaba las cargas que le asistirían, dentro de las cuales, al intentar acogerse a una de las causales de exclusión de la exigencia del agotamiento del aludido requisito de procedibilidad, se imponía prestar caución pues, con precisión, el legislador, al desarrollar las reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares, estableció que “(...) 2.- Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin***



embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. (...)”, y por supuesto, **tal exigencia de la referida caución no resulta desproporcionada, pues la misma tiene como fin servir de “contrapartida natural de las cautelas, que previene y defiende contra los abusos del actor, y los daños que su materialización y duración acarree; constituye el soporte necesario de las medidas precautorias en las que es exigida, en tanto, como se ha dicho, está destinada a asegurar el pago de los perjuicios que se irroguen con ellas”**<sup>2</sup>, en aras de armonizar los derechos e intereses de las partes en conflicto, privilegiando la tutela judicial efectiva, sin olvidar que en esta clase de procesos (declarativos) no existe certidumbre sobre el derecho en reclamo sino hasta cuando se emite sentencia en la que se defina de mérito la procedencia del mismo.

Así las cosas, encontrando que la aportación de la referida caución se imponía -en el monto fijado, pues el mismo resulta de la simple aplicación del porcentaje previsto previamente por el legislador- como presupuesto indispensable para la procedencia del decreto de las medidas cautelares solicitadas, y que ello de contera viabilizaba la admisión de la demanda sin el cumplimiento del tan aludido requisito de procedibilidad, ciertamente, había lugar a rechazar la demanda, **pues la mera expectativa del decreto de las mismas, sin el cumplimiento de las cargas procesales que le asisten a la parte interesada para alcanzar su procedencia y materialización, no logran sustituir la obligación de agotar aquel requisito, toda vez que admitirlo de esa manera, sería aceptar una forma de soslayar ese indispensable requisito extrajudicial, permitiendo el acceso directo a la administración de la justicia, contrariando así la voluntad expresa del legislador.**

(...) (Subrayado y negrita texto afuera)

1.8 Del mismo modo, en sentencia STC2105-2021 del 3 de Marzo de 2021 dictada por la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil, MP. Álvaro Fernando García Restrepo:

“En efecto, para rechazar la demanda de «nulidad relativa de contrato» formulada por los aquí interesados, los estrados judiciales querellados tuvieron en cuenta, de un lado, **que la parte demandante había desatendido la carga de prestar caución para garantizar los eventuales perjuicios** que pudieran causarse con la inscripción de la demanda en los folios de matrículas de los predios de propiedad de uno de los demandados; **y de otro lado, que como se desconoció esa obligación, dicha cautela, entonces, no podía materializarse, por lo que la solicitud careciera de fundamento, y por contera, no se suplía el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.**

Ahora, el Tribunal también concluyó que **no bastaba el requerimiento para el decreto y la práctica de medidas cautelares con la finalidad de relevar la satisfacción de dicho requisito, pues la finalidad del parágrafo primero del artículo 590 de la nueva ley de enjuiciamiento civil era, justamente, que los litigantes acudieran preferiblemente a ese medio de autocomposición con antelación al proceso judicial.**

Se aprecia de este modo, que **las valoraciones sobre los puntos materia** de discordia, sea cual fuere el criterio de cara a las mismas, **no fueron irreflexivas o antojadizas, sino basadas en una ponderación juiciosa de los elementos**

***demostrativos aportados al asunto cuestionado, de la situación respectiva y de las normas llamadas a gobernarla” (...) (Subrayado y negrita texto afuera)***

1.9 Así las cosas, se tiene que para no cumplir con la conciliación extrajudicial obligatoria se requiere que: i) la medida cautelar sea solicitada, ii) que la misma sea procedente y ii) que se cumplan los requisitos para su práctica, que en este caso es la prestación de una caución, la cual también tiene unos fines protegidos por el legislador.

1.10 Por si no bastase lo anterior, llama la atención que se la parte actora agotó el requisito de procedibilidad respecto de todas las demandadas con excepción de mi poderdante, tal y como se observa en la constancia de no acuerdo número 132 (E) – 2022 expedida por el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de San Buenaventura – Cartagena.

1.11 Con tal proceder es posible vislumbrar cómo a través de una solicitud de medida cautelar manifiestamente improcedente y sin el lleno de las exigencias legales, la parte demandante pretende relevarse del deber de agotamiento del requisito de procedibilidad frente a COMPENSAR EPS.

1.12 Más recientemente la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC2459-2022 del 4 de marzo de 2022 – Sala Civil, MP Luis Alonso Rico Puerta, reconoció que la solicitud de medidas cautelares improcedentes elevada en los procesos declarativos, no sustituye el requisito de procedibilidad de agotamiento de la conciliación. En dicha oportunidad, en un caso similar al que aquí nos convoca concluyó que:

*“(…) al analizarse la excepción para agotar la conciliación extrajudicial en juicios declarativos cuando para ello se solicitan medidas cautelares, a tono con la jurisprudencia de esta Corte, **encontró que para el caso sub júdice éstas no eran procedentes, y con ello, que ciertamente el requisito echado de menos por el juzgado al calificar la demanda, no había sido satisfecho.**” (...) (Subrayado y negrita texto afuera)*

1.13 De lo expuesto se colige que, a la luz de los requisitos propios que rigen la procedencia de la demanda, el auto que admitió aquella que fuere promovida por MARIA JOSE SAUMETH HERRERA deberá revocarse.

## **II. SOLICITUD**

De la manera más respetuosa, solicito al despacho se **REVOCAR** el auto de 24 de agosto de 2023, por medio del cual se admitió la demanda.

## **III. ANEXOS Y PRUEBAS**

3.1 Ejemplar digitalizado del poder general otorgado a la suscrita otorgado mediante Escritura Pública 12913 del 10 de diciembre de 2015 ante la Notaría 38 del Círculo de Bogotá D.C.

3.2 Copia certificado de Existencia y Representación Legal de COMPENSAR EPS en donde consta que el Dr. Luis Andrés Penagos Villegas es el representante legal de la entidad que represento.

3.3 Copia de la sentencia de 26 de julio de 2021 dictada por el M.P. Dr. Carlos Alberto Romero Sánchez del el Tribunal Superior de Cali – Sala Civil.

3.4 Copia de la sentencia STC2105-2021 del 3 de Marzo de 2021 dictada por la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil, MP. Álvaro Fernando García Restrepo

3.5 Copia de la sentencia STC2459-2022 del 4 de marzo de 2022 dictada por la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil, MP Luis Alonso Rico Puerta.

#### IV. NOTIFICACIONES

Mi poderdante, en la ciudad de Bogotá, D.C. en la Avenida 68 No. 49 A – 47 de Bogotá D.C. y en el correo electrónico [compensarepsjuridica@compensarsalud.com](mailto:compensarepsjuridica@compensarsalud.com).

La suscrita apoderada, en mi oficina profesional de abogada ubicada en la Diagonal 44 No. 68b-80 de la ciudad de Bogotá D.C., en el celular 3136010677 y en el correo electrónico [smbautistag@compensarsalud.com](mailto:smbautistag@compensarsalud.com).

De la Señora Jueza, con el mayor comedimiento.



**SANDRA MÓNICA BAUTISTA GUTIÉRREZ**

C.C. 52.967.033 expedida en Bogotá D.C.

T.P. 154.370 del C.S. de la J.





Ca436698240

## CERTIFICADO NUMERO: 9761/2023

EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) DEL CIRCULO DE BOGOTA  
CONFORME A LOS ARTICULOS 89 Y 90 DEL DECRETO 960/70 Y  
DEMAS NORMAS CONCORDANTES.

### CERTIFICA QUE:

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: **DOCE MIL NOVECIENTOS TRECE (12913)** DE FECHA **DIEZ (10) DE DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL QUINCE (2015)** OTORGADA EN ESTA NOTARIA, COMPARECIÓ EL DOCTOR **LUIS ANDRÉS PENAGOS VILLEGAS**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO **71.724.156** EXPEDIDA EN MEDELLÍN, QUIEN OBRA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR "COMPENSAR"** OTORGÓ PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LA DOCTORA **SANDRA MONICA BAUTISTA GUTIERREZ**, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO **52.967.033** EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., ABOGADA TITULADA CON TARJETA PROFESIONAL NUMERO **154.370** EXPEDIDA POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

CUYAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN DICHA ESCRITURA, Y QUE A LA FECHA NO APARECE NOTA DE REVOCACION, MODIFICACIÓN O SUSTITUCION ALGUNA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) CON DESTINO A: **EL INTERESADO**.



**RODOLFO REY BERMUDEZ**

NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.





EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO





ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

DOCE MIL NOVECIENTOS TRECE (12913)

FECHA DE OTORGAMIENTO:

DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015)

NOTARIA TREINTA Y OCHO (38) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

FORMULARIO DE CALIFICACIÓN

CÓDIGO NOTARIAL: 1100100038

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO IDENTIFICACIÓN:

PODERDANTE:

LUIS ANDRÉS PENAGOS VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadanía número 71.724.156 de Medellín en calidad de representante legal suplente de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR según certificado de existencia y representación expedido por la superintendencia de subsidio familiar, adjunto al presente escrito.

APODERADA

SANDRA MONICA BAUTISTA GUTIERREZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 52.967.033 expedida en Bogotá D.C.

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los diez (10) días del mes de diciembre de Dos mil quince (2015) el suscrito RODOLFO REY BERMUDEZ NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. da fe que las declaraciones que se contienen en la presente escritura han sido emitidas por quienes la otorgan.

Compareció con minuta escrita LUIS ANDRÉS PENAGOS VILLEGAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.724.156 expedida en Medellín quien obra en calidad de Representante Legal Suplente de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR, según certificado de existencia y representación expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar, por medio del presente escrito OTORGA PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE a la Doctora SANDRA MONICA BAUTISTA GUTIERREZ, abogada titulada, identificada con cedula de ciudadanía número 52.967.033 de Bogotá y con tarjeta profesional

NOT. 38  
MV



de abogado distinguida número 154.370 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación de la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR** ejecute todos y cada uno de los siguientes actos:-----

**1. REPRESENTACIÓN JUDICIAL.** Para que represente a la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR**, ante cualquier entidad, funcionario o empleado de la Rama Judicial y sus organismos vinculados o adscritos, en la interposición de cualquier acción de carácter civil, agraria, penal, laboral, administrativo, constitucional, comercial y/o de cualquier naturaleza, así como ser parte y comparecer en las mismas en calidad de demandado, notificándose y ejerciendo todas las diligencias y actuaciones propias del derecho de defensa y contradicción, y en general, continuando con tales actuaciones hasta la culminación de los procesos correspondientes. Dentro del presente acto, se incluyen de forma expresa, las siguientes facultades para que sean ejercidas por el poderdante en nombre y representación de la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR**: confesar judicialmente; recibir y/o cobrar; allanarse cuando así sea necesario; disponer del derecho de litigio; conciliar, absolver interrogatorio de parte; tachar de falsedad un documento o cualquier tipo de prueba; licitar y solicitar adjudicación de bienes; transigir y transar pleitos y diferencias que ocurran con terceros en el desarrollo de las actividades propias de la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR**; desistir de los procesos, pretensiones, reclamaciones o gestiones en que intervenga a nombre de esta, así como de los recursos que en ello interponga y de los incidentes que promueva. -----

**2. CONCILIACIÓN.** Para que en representación de la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR** acuda a las audiencias de conciliación y concilie con plenas facultades, incluyendo la representación legal en diligencias extrajudiciales y judiciales, así como en los procesos jurisdiccionales. -----

**3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.** Para que en representación de la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR** inicie, se notifique de actuaciones administrativas; invoque el silencio administrativo positivo; solicite revocatoria directa de actos administrativos; interponga los recursos de ley; y en general, realice todas las diligencias y actuaciones pertinentes para ejercer el derecho de defensa y





contradicción, y continúe tales actuaciones hasta la culminación de todas las acciones constitucionales, acciones contenciosas administrativas, investigaciones administrativas, y demás diligencias y trámites ante cualquier corporación, entidad, funcionario o empleado de las Ramas Ejecutiva y Judicial y sus órganos vinculados o adscritos, del Ministerio Público, de los órganos de control fiscal y demás autoridades administrativas del orden público nacional, departamental, distrital o local.

El ejercicio de las facultades que por este mandato se confieren, conllevan las responsabilidades propias de los mandatarios previstas en la legislación colombiana, sin perjuicio de las sanciones penales, fiscales y disciplinarias a que haya lugar.

El ejercicio de este poder no comprende el de vinculaciones de carácter laboral a la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR.**

Se presenta **SANDRA MONICA BAUTISTA GUTIERREZ**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., abogada titulada, identificada con cédula de ciudadanía Número 52.967.033 de Bogotá y con tarjeta profesional de abogado distinguida con el Número 154.370 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre propio y manifestó que acepta el poder que mediante esta escritura se le otorga.

### HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA

El suscrito Notario Treinta y Ocho (38) en uso de las atribuciones contempladas en el Artículo 12 del Decreto 2148 de 1983 y en virtud que el Doctor **LUIS ANDRÉS PENAGOS VILLEGAS**, actúa en calidad de representante legal suplente de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**, tiene registrada su firma en esta Notaria, **AUTORIZA** que el presente instrumento sea suscrito por la persona fuera del recinto Notarial en las Oficinas de la Entidad que representa.

**SE ADVIRTIÓ** al(a los) otorgante(s) de esta escritura de la **obligación que tiene(n) de leer la totalidad de su texto**, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que le(s) pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto (Artículo 35 decreto ley 960 de 1.970).

**SE ADVIERTE** igualmente la necesidad de diligenciar los espacios en blanco

RODOLFO REY BERMUDEZ  
38 Notario 38 (E) del Circuito de Bogotá

Ca436698245



1056100956015CCD

38-09-2015

07-06-23

12.5725510

12.5725510

NOT. 38  
MV



correspondientes a la información personal y de trabajo consignados en el espacio destinado para la firma de los suscriptores del instrumento publico, con el objeto de confrontar la información solicitada con el contenido de la escritura previo a la autorización de la misma. -----

En consecuencia, la notaria no asume ninguna responsabilidad por error o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma del(los) otorgante(s) y del notario. -----

En tal caso, de la existencia de estos, deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por el(los) que intervino (eron) en la inicial y sufragada por el (ellos) mismo(s) (Artículo 102 decreto ley 960 de 1.970).

**ESTA ESCRITURA FUE ELABORADA EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL**

**NÚMEROS:** -----

**Aa024305651- Aa028726381- Aa028724814**-----

**LEIDO** el presente instrumento público por los comparecientes manifestaron su conformidad con el contenido lo aprobaron en todas sus partes y en constancia de su aséntimiento lo firman con el suscrito notario que lo autorizo con mi firma. -----

**RETENCIÓN EN LA FUENTE. ARTÍCULOS 20 y 64 LEY 0075 de 1986.** ----- \$ Exento-----

**DERECHOS NOTARIALES** \$ 49.000-----

**SUPERINTENDENCIA** \$ 4.850-----

**FONDO NACIONAL DEL NOTARIADO** \$ 4.850-----

**IVA** \$ 19.248-----

**DECRETO 1681 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1.996, modificado por el DECRETO 3432 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2.011, nuevamente modificado por el DECRETO 0188 DEL 12 DE FEBRERO DE 2.013 y RESOLUCION 641 DEL 23 DE ENERO DE 2.015.**-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----





FOLIO ANTERIOR Aa028726381

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

DOCE MIL NOVECIENTOS TRECE (12913)

FECHA DE OTORGAMIENTO:

DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015)

NOTARÍA TREINTA Y OCHO (38) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

PODERDANTE

LUIS ANDRÉS PENAGOS VILLEGAS

C.C. 71.724.156 expedida en Medellín

Obra en calidad de Representante Legal suplente de la CAJA DE  
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

DIRECCIÓN OFICINA: Calle 73 N° 10-83 C.C. Av. Chile Torre D piso 9.

TELÉFONO OFICINA: 4289088 ext. 24569

CELULAR:

APODERADA

SANDRA MONICA BAUTISTA GUTIERREZ

C.C. No. 52.967.033 de Bogotá D.C.

DIRECCIÓN: Calle 73 N° 10-83 Centro Comercial Av. Chile Torre D piso 9 Bogotá D.C.

TELÉFONO: 4285088 Ext. 25687

CORREO ELECTRONICO [smbautistag@seguranientosalud.com](mailto:smbautistag@seguranientosalud.com)



Ca436698244

1039475530E15R5G1

29/08/2015

14/09/2015

cadena sa

NOT. JR

MV



EL (LA) NOTARIO(A) TREINTA Y OCHO (38)E  
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

RODOLFO REY BERMUDEZ

JORGE RIVERA

NOT. 38  
MM

BERMUDEZ





SuperSubsidio



MINTRABAJO

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS



Ca436698243

LA SUSCRITA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA  
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

## HACE CONSTAR QUE:

1. Le compete a esta Superintendencia ejercer la vigilancia e inspección sobre el ejercicio y función de las Cajas de Compensación Familiar.
2. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 16 del Decreto 2595 de 2012 es función de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales llevar el registro de las instituciones bajo vigilancia de la Superintendencia, de sus representantes legales, de los integrantes del Consejo Directivo y de los Revisores Fiscales.
3. La Corporación denominada **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR**, es una entidad Privada sin ánimo de lucro, organizada como Corporación que cumple funciones de Seguridad Social, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. y NIT 860066942-7, goza de personería jurídica conferida por medio de la Resolución No.2409 del 30/06/1978; proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
4. Según nuestros registros, el Representante Legal Suplente para efectos judiciales y conciliaciones extrajudiciales en asuntos atinentes a la Empresa Promotora de Salud – **EPS COMPENSAR** y en el caso de las **IPS COMPENSAR** cuando éstas estén involucradas en reclamaciones de responsabilidad civil médica o profesional de la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR**, es el doctor **LUIS ANDRÉS PENAGOS VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No.71.724.156 de Medellín y tarjeta profesional 85409 del C. S. de la J., designación aprobada por el Ente de Inspección, Vigilancia y Control mediante Resolución No. 0153 del 25 de marzo de 2011 y Acta de Posesión No. 609.
5. Según información suministrada por la citada Caja, la dirección para efectos de notificaciones judiciales es la Avenida 68 No.49A - 47 de esta ciudad.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de octubre de 2015.

  
**JEANNETTE BENÍTEZ DE ARÉVALO**  
Superintendente DelegadaProyectó: María Esther Gaicedo Angulo Calle 45 A No. 9-46 PBX: 3487800 Bogotá Colombia  
Línea Gratuita Nacional 018000910110 en Bogotá D.C.: 3487777  
www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co



ES LA COPIA (FOTOCOPIA) NUMERO =158= DE LA  
ESCRITURA PÚBLICA =12913= DE FECHA =10= DEL  
MES DE =DICIEMBRE= DEL AÑO =2015= TOMADA DE  
SU ORIGINAL QUE SE EXPIDE CONFORME AL  
ARTÍCULO 41 DEL DECRETO 2148 DE 1983, EN =05=  
HOJAS CON DESTINO AL: =INTERESADO=

DADO EN BOGOTÁ, D.C., EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023



**RODOLFO REY BERMUDEZ**

NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E) DEL CIRCULO DE BOGOTA



## SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C., 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

EL SUSCRITO DELEGADO PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE LAS ENTIDADES BAJO LA VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA.

### C E R T I F I C A

NOMBRE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR  
NIT. 8600669427

DOMICILIO: 3

DIRECCIÓN: Avenida 68 No. 49 A - 47

TELÉFONO: 4280666

EMAIL PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS:

notificacionesjudiciales@compensar.com

CONSTITUCIÓN Y OBJETO: LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR ES UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO, ORGANIZADA COMO CORPORACIÓN QUE CUMPLE FUNCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 21 DE 1982, ARTÍCULO 42, Y LA LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 16, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN SUSTITUYAN O ADICIONEN. GOZA DE PERSONERÍA JURÍDICA CONFERIDA POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN No. 2409 DE FECHA 30/06/1978 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 62 DE LA LEY 21 DE 1982, EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 789 DE 2002, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, SUSTITUYAN O ADICIONEN

### C E R T I F I C A

REPRESENTACIÓN LEGAL:

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LOS ESTATUTOS, ELECCIÓN Y REMOCIÓN. COMPENSAR TENDRÁ UN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y UN NÚMERO DE SUPLENTE, DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD QUE REQUIERA LA OPERACIÓN, QUIENES EN SU ORDEN LO REEMPLAZARÁN EN SU FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL. LOS SUPLENTE SERÁN DESIGNADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, EL CU DE LOS ESTATUTOS, LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA CORPORACIÓN ESTÁN A CARGO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, QUIEN SERÁ ELEGIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN SU PRIMERA REUNIÓN PARA PERÍODOS DE CUATRO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU ELECCIÓN Y SIN PERJURIO DE SU REMOCIÓN POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN CASO QUE NO SE LLEVE A EFECTO

LA ELECCIÓN, CONTINUARÁ COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO QUIEN HAYA SIDO ELEGIDO PARA EL PERÍODO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

DIRECTORES ADMINISTRATIVOS	NOMBRES	CÉDULA DE CIUDADANÍA	RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ SU DESIGNACIÓN
PRINCIPAL	Carlos Mauricio Vásquez Paez	79.541.640	0556 10/09/2019
SUPLENTE	Margarita Añez Sampedro	51.779.392	0713 09/12/2019
SEGUNDO SUPLENTE	Andrés Barragán Tobar	19.489.949	0713 09/12/2019
TERCER SUPLENTE	Oscar Mario Ruiz	79.538.820	0053 20/02/2009

### CERTIFICA

#### FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Conforme al Artículo 38° de los Estatutos de la Corporación, son funciones del Director Administrativo las siguientes: 1. Dirigir a COMPENSAR para el mejor cumplimiento de los fines para los cuales fue creada. 2. Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y reglamentos de COMPENSAR, los ordenamientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar y las decisiones de la Asamblea General de Afiliados y del Consejo Directivo. 3. Asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Directivo. 4. Representar a COMPENSAR judicial y extrajudicialmente. 5. Presentar a la Asamblea General y al Consejo Directivo, en sus reuniones ordinarias o cada vez que lo exijan, las cuentas, balances y cualquier informe sobre la marcha de COMPENSAR. 6. Convocar a la Asamblea General y al Consejo Directivo conforme a los presentes estatutos. 7. Girar, aceptar, endosar, negociar en cualquier forma, títulos valores, titularizar cartera y ejecutar los actos o contratos que se requieran para el cumplimiento de los fines de COMPENSAR, dentro de las previsiones estatutarias. 8. Nombrar los empleados de COMPENSAR cuya designación no esté reservada a otros órganos de la Caja y removerlos libremente. 9. Celebrar todos los actos de disposición y administración necesarios y conducentes al logro del objeto de COMPENSAR, con las limitaciones que establezcan los estatutos, la Asamblea General o el Consejo Directivo. 10. Cumplir con las demás funciones que le asignen la ley, los estatutos, la Asamblea General y el Consejo Directivo.

#### LIMITACIONES PARA CONTRATAR:

MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA NO. 51 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022, LA ASAMBLEA APROBÓ POR MAYORÍA, LA CUANTÍA POR LA CUAL EL DIRECTOR PUEDE CONTRATAR SIN CONSULTA PREVIA AL CONSEJO DIRECTIVO ASCIENDE A \$ 29.868.380.803. LA CUAL FUE APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 0292 DE 23 DE MAYO DE 2022, EJECUTORIADA EL 8 DE AGOSTO DE 2022.

### CERTIFICA

## REPRESENTANTES LEGALES ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES

### NOMBRE:

Luis Andrés Penagos Villegas  
C.C. No. 71.724.156 de Medellín  
T.P. No. 85409 C S de la J

DESIGNACIÓN APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR MEDIANTE  
RESOLUCIÓN No. 0153 DEL 25/03/2011

## CERTIFICA

### CONSEJO DIRECTIVO

PERIODO 2022-2026

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 0292 del  
23/05/2022 Y AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO A PARTIR DEL 09/08/2022:

## EMPLEADORES

PRINCIPAL		
REGLÓN	AFILIADO	DESIGNADO
PRIMER REGLÓN	<b>Empresa:</b> R&I SEGUROS LTDA <b>Nit Empresa:</b> 900.148.606-4 <b>Dirección Empresa:</b> Carrera 67 No. 167 - 61 Oficina 403 de Bogotá, D.C.	<b>Principal 1:</b> ALVARO ANTONIO ROZO PALOU <b>Cédula:</b> 438.255 de Bogotá, D.C.
SEGUNDO REGLÓN	<b>Empresa:</b> DISTRICARGO OPERATIONS S.A <b>Nit Empresa:</b> NIT. 830.033.723-1 <b>Dirección Empresa:</b> carrera 106 No 15-25 MZ 09 BG 04 de BOGOTÁ	<b>Principal 2:</b> ALVARO JOSÉ RIVERA HERNANDEZ <b>Cédula:</b> 19270606 de BOGOTÁ
TERCER REGLÓN	<b>Empresa:</b> MY PEOPLE CONSULTORES ORGANIZACIONALES SAS <b>Nit Empresa:</b> 830.033.522-6 <b>Dirección Empresa:</b> CARRERA 7 # 156-68 of 1305 Edificio North Point III de BOGOTÁ	<b>Principal 3:</b> LILIANA ARROYO VARGAS <b>Cédula:</b> 66.763.369 de PALMIRA
CUARTO REGLÓN	<b>Empresa:</b> 10 AUDIO S.A.S. <b>Nit Empresa:</b> 900.537.951-1 <b>Dirección Empresa:</b> Calle 78 No. 9 - 57 de Bogotá, D.C.	<b>Principal 4:</b> CARLOS SAAVEDRA GARCÍA <b>Cédula:</b> 19.071.244 de Bogotá, D.C.
QUINTO REGLÓN	<b>Empresa:</b> SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A <b>Nit Empresa:</b> 800.148.514-2 <b>Dirección Empresa:</b> Avenida 19 No 109A-30 de BOGOTÁ	<b>Principal 5:</b> CLAUDIA LLIANA SOLANO ROA <b>Cédula:</b> 39.787.825 de Usaquén

Identificador: vzFT p14A nWXQ BYoR y/Q nH4Z C0l=  
La validez de este documento puede verificarse en: <https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica>





SUPLENTE		
REGLÓN	AFILIADO	DESIGNADO
PRIMER REGLÓN	<b>Empresa:</b> FASECOLDA <b>Nit Empresa:</b> 860.049.275-0 <b>Dirección Empresa:</b> Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 11 de Bogotá, D.C.	<b>Suplente 1:</b> MARIA CLAUDIA CUEVAS MARTÍNEZ <b>Cédula:</b> 52.647.393 de USAQUÉN
SEGUNDO REGLÓN	<b>Empresa:</b> CONTINENTAL BUS S.A <b>Nit Empresa:</b> 800.227.937 <b>Dirección Empresa:</b> AVENIDA BOYACÁ # 15-69 de BOGOTÁ	<b>Suplente 2:</b> MARÍA DEL PILAR BETANCOURT CONTRERAS, <b>Cédula:</b> 51.905.743 de BOGOTÁ
TERCER REGLÓN	<b>Empresa:</b> LA BIFERIA S.A <b>Nit Empresa:</b> 830.135.186-2 <b>Dirección Empresa:</b> CRA 45 NO. 123-33 de BOGOTÁ	<b>Suplente 3:</b> JUAN ANTONIO CABALLERO ARGAEZ <b>Cédula:</b> 19.286.431 de BOGOTÁ
CUARTO REGLÓN	<b>Empresa:</b> FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS FECOLSA <b>Nit Empresa:</b> 860.527.467-9 <b>Dirección Empresa:</b> CALLE 99 NO.13-11 de BOGOTÁ	<b>Suplente 4:</b> MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ <b>Cédula:</b> 39.682.278 de USAQUÉN
QUINTO REGLÓN	<b>Empresa:</b> SERVICIOS Y MANO DE OBRA SUPLEMENTARIA SERVIMOS S.A.S <b>Nit Empresa:</b> 860.051.638-7 <b>Dirección Empresa:</b> CALLE 42 A NO. 9 - 63 de Bogotá, D.C.	<b>Suplente 5:</b> RUBÉN DARÍO LÓPEZ CORREA <b>Cédula:</b> 16.050.124 de PACORA
SEXTO REGLÓN	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>	<b>Suplente 6:</b> <b>Cédula:</b>
SÉPTIMO REGLÓN	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>	<b>Suplente 7:</b> <b>Cédula:</b>
OCTAVO REGLÓN	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>	<b>Suplente 8:</b> <b>Cédula:</b>
NOVENO REGLÓN	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>	<b>Suplente 9:</b> <b>Cédula:</b>
DÉCIMO REGLÓN	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>	<b>Suplente 10:</b> <b>Cédula:</b>

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DESIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 1656 del 23/05/2022 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO POR ESTA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A PARTIR DEL 01/06/2022:

### TRABAJADORES

PRINCIPAL		
REGLÓN	TRABAJADOR	AFILIADO
PRIMER REGLÓN	<b>Principal 1:</b> FABIÁN ONEIVER CONTRERAS LEMUS <b>Cédula:</b> 79.952.012 de BOGOTÁ	<b>Empresa:</b> SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A <b>Nit Empresa:</b> 860002180 <b>Dirección Empresa:</b> AV. DORADO NO. 68B-31 de BOGOTÁ D.C
SEGUNDO REGLÓN	<b>Principal 2:</b> JORGE ADONAI ESPINOZA PÉREZ <b>Cédula:</b> 19.233.530 de BOGOTÁ	<b>Empresa:</b> FEDERACIÓN CGT SECCIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA <b>Nit Empresa:</b> 900530873 <b>Dirección Empresa:</b> DIAGONAL 39 A BIS # 14-52 de BOGOTÁ
TERCER REGLÓN	<b>Principal 3:</b> ALBERTO ALFREDO CASTILLO FANDIÑO <b>Cédula:</b> 79.749.086 de BOGOTÁ D.C	<b>Empresa:</b> AJECOLOMBIA S.A <b>Nit Empresa:</b> 830081407 <b>Dirección Empresa:</b> KM 2 VÍA FUNZA SIBERIA PARQUE INDUSTRIAL SAN ANTONIO BOD 123 BL A de No registra
CUARTO REGLÓN	<b>Principal 4:</b> MARÍA DORIS GONZÁLEZ <b>Cédula:</b> 41.713.286 de BOGOTÁ	<b>Empresa:</b> SUBRED INTEGRA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE <b>Nit Empresa:</b> 900959051-7 <b>Dirección Empresa:</b> DIAGONAL 34 No. 5-43 de BOGOTÁ
QUINTO REGLÓN	<b>Principal 5</b> MIGUEL ENRIQUE MORANTES SABOGAL <b>Cédula:</b> 19.430.928 de BOGOTÁ	<b>Empresa:</b> INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU <b>Nit Empresa:</b> 8999999081 <b>Dirección Empresa:</b> CALLE 22 NO. 6-27 de BOGOTÁ
SUPLENTE		
REGLON	TRABAJADOR	AFILIADO
PRIMER REGLÓN	<b>Suplente 1</b> ALBERTO LEÓN TORRES <b>Cédula:</b> 19.427.035 de BOGOTÁ.	<b>Empresa:</b> DELTA SALUD SAS BIC <b>Nit Empresa:</b> 800214959 <b>Dirección Empresa:</b> CALLE 116 NO. 18-77 de BOGOTÁ
SEGUNDO REGLÓN	<b>Suplente 2</b> ADRIAN CORTES VARGAS <b>Cédula:</b> 79.182.723 de SIBATE	<b>Empresa:</b> CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ SA CORABASTOS <b>Nit Empresa:</b> 860028093 <b>Dirección Empresa:</b> AV. CARRERA 80 NO. 2-51 EDF. ADMON de BOGOTÁ



TERCER RENGLÓN	<b>Suplente 3</b> MARIO ALEXANDER SANCHEZ TORRES <b>Cédula:</b> 79.623.726 de BOGOTÁ	<b>Empresa:</b> BANCO GNB SUDAMERIS SA <b>Nit Empresa:</b> 860050750 <b>Dirección Empresa:</b> CALLE 34 NO, 24-08 de BOGOTÁ
CUARTO RENGLÓN	<b>Suplente 4</b> MELVA RINCÓN SUÁREZ <b>Cédula:</b> 37.310.464 de OCAÑA	<b>Empresa:</b> FONDO EDUCATIVO REGIONAL DE BOGOTÁ <b>Nit Empresa:</b> 899999061-9 <b>Dirección Empresa:</b> AV. EL DORADO # 66-63 de BOGOTÁ
QUINTO RENGLÓN	<b>Suplente 5</b> CLAUDIA PATRICIA SUAREZ SEGURA <b>Cédula:</b> 41.106.900 de ORITO	<b>Empresa:</b> FUNDACIÓN CLINICA SHAI <b>Nit Empresa:</b> 860006656 <b>Dirección Empresa:</b> DIAGONAL 115 A No. 70C-75 de BOGOTÁ
SEXTO RENGLÓN	<b>Suplente 6:</b> <b>Cédula:</b>	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>
SÉPTIMO RENGLÓN	<b>Suplente 7:</b> <b>Cédula:</b>	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>
OCTAVO RENGLÓN	<b>Suplente 8:</b> <b>Cédula:</b>	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>
NOVENO RENGLÓN	<b>Suplente 9:</b> <b>Cédula:</b>	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>
DÉCIMO RENGLÓN	<b>Suplente 10:</b> <b>Cédula:</b>	<b>Empresa:</b> <b>Nit Empresa:</b> <b>Dirección Empresa:</b>

CERTIFICA

REVISOR FISCAL

PERIODO 2022 - 2026 Ó SU DESIGNACIÓN

REVISORES FISCALES	PERSONA JURIDICA	NOMBRES	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA PROFESIONAL	RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ SU DESIGNACIÓN
PRINCIPAL	BAKER TILLY		80.353.347	35189-T	0499 05/08/2022



**SuperSubsidio**  
Vigilamos tu caja de compensación



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

COLOMBIA  
LTDA.  
NIT.  
800.249.449-  
5

BERNARDO  
RODRÍGUEZ  
LAVERDE

SUPLENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES S.A.S NIT. 860.008.890- 5	JOANA KATERIN PARRA BORDA	1.032.368.135	199.627-T	0198 03/03/2023
----------	---	------------------------------------	---------------	-----------	--------------------

**Carlos Andrés Esquiaqui Rangel**

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO  
FAMILIAR**

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7  
PBX: (57+1) 348 7800 Bogotá - Colombia  
Línea Gratuita Nacional: 018000 910 110 en Bogotá D.C.: 3487777  
[www.ssf.gov.co](http://www.ssf.gov.co) - email [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI  
SALA CIVIL**

**Magistrado Sustanciador: CARLOS ALBERTO ROMERO SÁNCHEZ**

Santiago de Cali, veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

Proceso: Verbal  
Demandante: Robert Mauricio Acevedo Quijano y otros  
Demandado: Jhon Jairo Arias Correa y otros  
Radicación: 76001-31-03-010-2020-00036-01  
Asunto: Apelación de Auto

Se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto por el cual se rechazó la demanda.

**ANTECEDENTES**

1.- Idali Castaño Cuervo, María José Ceballos Castaño, Julio Cesar Castaño Cuervo, Michelle Dayana Ceballos Castaño. Robert Mauricio Acevedo Quijano, Valentina Acevedo Quijano, Tomas Escobar Rodríguez y Juanita Escobar Rodríguez, presentaron demanda contra Taxi Valcali S.A., Alfonso Delgado Aragón y Jhon Jairo Arias Correa, para que se les declare “civil y solidariamente responsables de indemnizar los perjuicios extrapatrimoniales causados [...] por las lesiones que recibió la señora KAREN DAYAN ACEVEDO QUIJANO en [un] accidente de tránsito”, solicitando que se decreten diferentes medidas cautelares, las cuales estima “necesaria[s] y razonable[s] para proteger el derecho objeto del litigio”.

2.- Asignado el proceso, por reparto, se tiene que la juez *a quo* decidió que “[p]ara efectos de decretar la inscripción de la demanda, sobre el vehículo

sujeto a registro, objeto del proceso, preste el demandante caución por la suma de \$193'116.660 m. cte., valor equivalente al 20% de las pretensiones estimadas en la demanda para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica [...], de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, del artículo 590 del C. G. P., en concordancia con el artículo 591 de la misma obra [...], [otorgándole al demandante] [p]ara tal efecto [...] el término de 10 días contados a partir de la ejecutoria [de ese auto]”.

3.- Ante la solicitud de los demandados de relevarlos de la obligación de presentar la caución, toda vez que “para la expedición de la caución, las aseguradoras exigen a los demandantes ser declarantes de renta, tener un patrimonio de al menos \$193.116.660 y suscribir una garantía, es decir, hacer que esos bienes que deben tener a los demandante para que se les expida la póliza, sean colocados como respaldo en favor de la aseguradora [...], [siendo que] las condiciones exigidas [...] son imposibles de cumplir para cada uno de los demandantes, pues no son declarantes del impuesto de renta, no tienen bienes cuyo valor ascienda [al referido monto] y obviamente tampoco podrían entonces otorgar una contragarantía en favor de lo aseguradora”, se tiene que la juez de instancia resolvió “NEGAR lo solicitado [...], [e]n primer lugar, por cuanto [la solicitud de amparo de pobreza], no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 152 de la misma obra, pues la manifestación de no estar en condiciones económicas para prestar caución, no se hace bajo la gravedad del juramento [...]; [y] [e]n segundo lugar, el monto de la caución fijada [...], se fijó atendiendo la naturaleza y pretensiones de la demanda de conformidad a lo previsto en el artículo 590 del C. G. P.”. como lo exige dicha disposición.”

4.- Definido lo anterior, y ante la solicitud proveniente de la parte actora encaminada a que “teniendo en cuenta que (i) los accionantes solicitaron la práctica de medidas cautelares; (ii) que ellas son pertinentes y tiene[n] vocación de éxito; (iii) que la imposibilidad de practicarlas obedece a circunstancias ajenas a [sus] mandantes y (iv) que la falta de decreto y práctica de la cautela no impide la admisión de la demanda según lo previsto en el parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso, [por lo que era procedente que] se admita la demanda y se ordene la notificación de los demandados”, aparece que la juez *a quo* resolvió “RECHAZAR la demanda

[...]”, tras considerar que como “[e]l presente asunto vers[a] sobre materia conciliable y se trata de un proceso declarativo [...], se hace necesario acompañar [...] como requisito de procedibilidad la Conciliación extrajudicial”, y que “si bien, en principio, no se exigió [el mismo], lo fue por cuanto, con la demanda, se solicitó el decreto de medidas cautelares [...]; [s]in embargo, ante el incumplimiento de la parte actora, al no aportar la caución exigida [...] para efectos de proceder, a decretar la medida cautelar solicitada, previo a la admisión de la demanda, queda sin efecto la medida cautelar, por tanto, en este caso, no hay lugar a la admisión de la demanda, sin haber acreditado que agotó la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad (num. 7 art. 90 C.G.P.)”.

5.- Inconforme con la decisión, la parte actora recurrió la misma en reposición y subsidiariamente en apelación, alegando que “para que opere la excepción [contenida en el párrafo primero del artículo 590 del C.G.P.], no se requiere que la cautela sea efectivamente decretada y practicada, aunque la petición si debe corresponder a medidas cautelares que sean aplicables al caso y tengan vocación de prosperidad”, que para el presente asunto “tienen vocación de prosperidad, más allá de que [...], en este momento no puedan cumplir las condiciones exigidas por las aseguradoras para expedir la caución requerida [...]”.

Por ese camino, agregó que “la falta de decreto y práctica de la cautela no impide la admisión de la demanda”, y que “[n]o existe norma alguna que autorice el rechazo de la demanda cuando las medidas cautelares solicitadas no puedan practicarse, [pues] lo que exige el Código General del Proceso para que no se requiera agotar el requisito de procedibilidad es únicamente que se SOLICITEN medidas cautelares, no que se decreten y practiquen”; y finalmente, destacó que “el valor comercial de un automotor como el que es objeto de la medida [...] no supera los \$15.000.000, no obstante, el monto de la caución es de \$193.116.660, más de 12 veces el valor del bien sobre el que se pretende la inscripción de la demanda”.

6.- La juez de primera instancia confirmó su decisión, lo que explica la presencia de las diligencias en esta instancia, luego de señalar que

“[e]n el presente caso, se solicitó la inscripción de la demanda, medida cautelar que es procedente en los procesos declarativos, y por ello previo a su decreto se ordenó prestar caución, la cual no fue aportada por la parte actora, quedando la misma en una simple solicitud, que dio lugar a [...] [rechazar] la demanda”, pues “[e]n efecto, la simple solicitud de medida cautelar sin la posterior prestación de la caución, no puede tenerse ni aceptarse como una forma de soslayar o eludir el requisito de procedibilidad y permitir que no se cumpla con los fines para los cuales fue prevista por el legislador [...], [e]ntonces, ante el incumplimiento de la parte actora, al no aportar la caución exigida [...], ya no hay lugar a la admisión de la demanda sino a su rechazo, porque no agotó la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad”.

## **CONSIDERACIONES**

1.- Por sabido se tiene que con el procedimiento conciliatorio extrajudicial obligatorio, se persigue brindar un espacio a las partes para que traten de hallar por sí mismas la fórmula que les permita solucionar sus diferencias, antes de reclamar su composición al órgano jurisdiccional del Estado, exigencia que se tiene por satisfecha cuando se realiza ese intento, independientemente de su resultado.

Dicha etapa prejudicial en materia civil, se encuentra regulada en los artículos 35 y 38 de la Ley 640 de 2001 (este último reformado por el artículo 621 del C. G. del P.), de los cuales se extrae que es necesario agotar el requisito de procedibilidad, para acudir a la jurisdicción civil, cuando: i) se trata de asuntos susceptibles de conciliación; y ii) se trata de procesos declarativos (exceptuados los de expropiación, divisorios y aquellos en los que se demande o deba citarse a indeterminados).

No obstante, dicha normatividad (artículo 35) exige la observancia del requisito, en aquellos eventos en los que se ignora el domicilio, lugar de habitación y de trabajo del demandado o se manifiesta que éste se encuentra ausente y no se conoce su paradero. Lo propio sucede



cuando en la demanda se solicita la práctica de medidas cautelares, al tenor del párrafo primero del artículo 590 del C. G. del P., norma según la cual “en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, **cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez**, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad”.

2.- Bajo la óptica de lo expuesto, evidencia la Sala Unitaria que la decisión de instancia debe confirmarse, pues como viene de verse la exigencia del requisito de procedibilidad, únicamente se exime ante la concurrencia de condiciones especiales que permiten acudir directamente a la jurisdicción, sin que en el presente caso se configure alguna de aquellas.

Y lo anterior es así, debido a que si bien no se desconoce que la parte demandante al formular la demanda solicitó el decreto de diferentes medidas cautelares -que, en principio, la relevarían de agotar el aludido presupuesto de procedibilidad- lo cierto es que aquel eximente no se encuentra acreditado, pues al ser requerida para aportar la caución respectiva, que daría lugar al decreto y posterior materialización de las mismas, la parte interesada se sustrajo de ello injustificadamente, toda vez que aun cuando alegó una situación de indefensión económica, como se sabe, las reglas procesales son de orden público, al paso que procurando acogerse a la figura de amparo de pobreza, no lo solicitó en debida forma, siendo así decidido desfavorablemente por la juez de instancia, sin que la parte interesada mostrara inconformidad alguna al respecto.

En ese sentido, evidente resulta que al no lograrse la materialización de las aludidas cautelas, agotar la conciliación se mostraba imperativo, comoquiera que “lejos de desconocer, suspender o impedir el acceso a la administración de justicia, la conciliación extrajudicial como requisito previo es una

garantía para hacer efectivo y real este derecho fundamental. Y, por consiguiente, [...] se trata de una limitación razonable desde el punto constitucional”<sup>1</sup>.

Ahora bien, además de lo anterior, cumple señalar que desde la formulación de la demanda, la parte actora, quien actúa a través de apoderado judicial, al determinar sus pretensiones anticipaba las cargas que le asistirían, dentro de las cuales, al intentar acogerse a una de las causales de exclusión de la exigencia del agotamiento del aludido requisito de procedibilidad, se imponía prestar caución pues, con precisión, el legislador, al desarrollar las *reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares*, estableció que “(...) 2.- Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. (...)”, y por supuesto, tal exigencia de la referida caución no resulta desproporcionada, pues la misma tiene como fin servir de “contrapartida natural de las cautelares, que previene y defiende contra los abusos del actor, y los daños que su materialización y duración acarree; constituye el soporte necesario de las medidas precautorias en las que es exigida, en tanto, como se ha dicho, **está destinada a asegurar el pago de los perjuicios que se irroguen con ellas**”<sup>2</sup>, en aras de armonizar los derechos e intereses de las partes en conflicto, privilegiando la tutela judicial efectiva, sin olvidar que en esta clase de procesos (declarativos) no existe certidumbre sobre el derecho en reclamo sino hasta cuando se emite sentencia en la que se defina de mérito la procedencia del mismo.

Así las cosas, encontrando que la aportación de la referida caución se imponía -en el monto fijado, pues el mismo resulta de la simple

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-834 de 2013.

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Salvamento de Voto del Doctor Ariel Salazar Ramírez. Proveído STC9384 de 11 de julio de 2016. Ref. 11001-02-03-000-2016-01219-00.

aplicación del porcentaje previsto previamente por el legislador- como presupuesto indispensable para la procedencia del decreto de las medidas cautelares solicitadas, y que ello de contera viabilizaba la admisión de la demanda sin el cumplimiento del tan aludido requisito de procedibilidad, ciertamente, había lugar a rechazar la demanda, pues la mera expectativa del decreto de las mismas, sin el cumplimiento de las cargas procesales que le asisten a la parte interesada para alcanzar su procedencia y materialización, no logran sustituir la obligación de agotar aquel requisito, toda vez que admitirlo de esa manera, sería aceptar una forma de soslayar ese indispensable requisito extrajudicial, permitiendo el acceso directo a la administración de la justicia, contrariando así la voluntad expresa del legislador.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, estimó razonable lo considerado por parte de un juez natural en un caso de similares contornos a este, concluyendo que “[e]n efecto, para rechazar la demanda de «*nulidad relativa de contrato*» formulada por los aquí interesados, los estrados judiciales querellados tuvieron en cuenta, de un lado, que la parte demandante había desatendido la carga de prestar caución para garantizar los eventuales perjuicios que pudieran causarse con la inscripción de la demanda en los folios de matrículas de los predios de propiedad de uno de los demandados; y de otro lado, que como se desconoció esa obligación, dicha cautela, entonces, no podía materializarse, por lo que la solicitud careciera de fundamento, y por contera, no se suplía el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial. Ahora, el Tribunal también concluyó que no bastaba el requerimiento para el decreto y la práctica de medidas cautelares con la finalidad de relevar la satisfacción de dicho requisito, pues la finalidad del parágrafo primero del artículo 590 de la nueva ley de enjuiciamiento civil era, justamente, que los litigantes acudieran preferiblemente a ese medio de autocomposición con antelación al proceso judicial”<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Sentencia STC2105-2021 de 3 de marzo de 2021. Radicación N° 11001-02-03-000-2021-00384-00. M.P. Dr. Álvaro Fernando García Restrepo.

3.- Por ese camino, como se advirtió, se torna imperativa la confirmación del proveído recurrido, en tanto los argumentos izados para controvertirla no resultan suficientes para determinar que la misma no se ajusta a los cánones legales que rigen la materia. En efecto, según la normativa en comento, se exige el requisito de procedibilidad ante la existencia de solicitud de medidas cautelares, siempre y cuando las mismas logren materializarse, y no la mera solicitud de ese talante, desatendiendo las cargas que viabilizarían su procedencia, conforme aconteció en este caso.

En razón de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en Sala Civil de Decisión,

### **RESUELVE**

**PRIMERO.- CONFIRMAR** la decisión objeto de recurso, conforme a las razones expuestas.

**SEGUNDO.-** Sin costas en esta instancia, por no haberse causado.

**TERCERO.-** Devuélvase el asunto al juzgado de origen.

**NOTIFÍQUESE.**

  
**CARLOS ALBERTO ROMERO SÁNCHEZ**  
**Magistrado**



## **ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO**

Magistrado ponente

**STC2105-2021**

**Radicación n.º 11001-02-03-000-2021-00384-00**

(Aprobado en sesión virtual de tres de marzo de dos mil veintiuno)

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno  
(2021).-

Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por **Francisco Javier Sandoval Buitrago, Clara Inés Ruíz Garzón, Milton Javier y Paula Andrea Sandoval Ruíz**, contra la **Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali** y el **Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad**, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.

### **ANTECEDENTES**

1. Los promotores del amparo reclaman la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al rechazar la demanda que instauraron contra Abelardo Bustos Dueñas y Laura Bustos Arévalo, por no haber agotado la conciliación como requisito de procedibilidad, pese a que pidieron medidas cautelares.

Reclaman entonces, para la protección de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, *«dejar sin efectos los autos [cuestionados], y, en su lugar, proceder a admitir la demanda»* formulada dentro del proceso censurado.

2. En apoyo de su reparo aducen, en síntesis, que demandaron a Abelardo Bustos Dueñas y a Laura Bustos Arévalo, con el propósito de que se declarara la *«nulidad relativa»* del contrato de *«compraventa de la sociedad Seguridad Y Vigilancia Cien Por Ciento Ltda.»*, ya que los demandados actuaron *«dolosamente»* al vender la totalidad de las acciones de dicha compañía, ocultando pasivos que no se encontraban relacionados en sus estados financieros, solicitando que se decretara como *«medida cautelar nominada»* la *«inscripción de la demanda»* en varios predios de propiedad de la parte pasiva.

Manifiestan que mediante auto del 26 de febrero de 2020, el Juzgado accionado inadmitió el escrito inaugural y les concedió el término de cinco (5) días para que prestaran caución por valor de *«\$432.471.200.00»*, en aras de garantizar el eventual pago de las *«costas y perjuicios que con las medidas*

*cautelares pudieren causarse», o en su defecto, que dentro del mismo lapso acreditaran que llevaron a cabo la «conciliación prejudicial» con los demandados, so pena de rechazo; sin embargo, afirman, debido a la «cuantía de la caución y al poco tiempo para constituir la», no cumplieron con esa carga, así que en auto del 9 de marzo siguiente, el *a quo* rechazó la demanda, determinación que recurrieron sin éxito, pues en auto del 10 de agosto subsiguiente el Tribunal convocado la confirmó íntegramente, tras advertir que la falta de pago de la caución conllevaba la no materialización de la cautela, y por ende, la obligatoriedad de agotar el requisito de la «conciliación prejudicial».*

De esta manera, sostienen que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que desatendieron lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso, según el cual, dicen, para suplir el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial basta con solicitar la práctica de medidas cautelares, aunque éstas no se puedan materializar. De otro lado, se desconocieron los «*salvamentos de voto*» de la sentencia de tutela «*STC3028-2020*» de esta Sala, en los que se tuvo en cuenta solamente la necesidad del interesado en «*requerir la medida cautelar para quedar relevado de intentar la conciliación prejudicial, sin que sea indispensable que el juzgador las decrete o practique*».

3. Una vez asumido el trámite, el 23 de febrero hogaño se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado

a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.

## **RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS**

a). La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali alegó, que *«es plausible el rechazo de la demanda declarativa cuando no haya podido decretarse la medida cautelar solicitada, desde luego, ante la incuria de los interesados para prestar caución, máxime cuando la cautela se constituía en instrumento para subrogar el requisito de procedibilidad (conciliación extrajudicial)»*, por tal razón, los argumentos expuestos en el proveído cuestionado se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico.

b). Por su parte, el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad también se opuso a la prosperidad del amparo, con sustento en que las decisiones cuestionadas están amparadas en la ley, comoquiera que *«la esencia de la determinación que llevó a la instancia a rechazar la demanda, consistió en que efectivamente se evidenció que la parte demandante no prestó dentro de los términos concedidos la caución señalada para la práctica de las medidas cautelares, aparte de que no hubo un agotamiento de la conciliación extrajudicial, por consiguiente, no había lugar a alegar la causal de excepción prevista en el parágrafo primero del artículo 590 del CGP, para acudir de forma directa a la administración de justicia sin haber agotado previamente la conciliación como requisito de procedibilidad que en esta oportunidad se echa de menos»*.



c). Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se habían efectuado más pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional.

## **CONSIDERACIONES**

1. En innumerables fallos la Corte ha decantado que la tutela tan sólo procede contra providencias o actuaciones judiciales en los casos en que éstas entrañen alguna causal de procedencia del amparo, valga decir, que sean el fruto de una arbitrariedad del administrador de justicia, en cuya virtud, se ocasione quebranto a los derechos fundamentales, siempre que el afectado no tenga a su disposición otra forma de resguardo judicial o que haya acudido tardíamente al escenario constitucional.

2. En el presente asunto, los accionantes cuestionan los autos del 9 de marzo y 10 de agosto, ambos de 2020, mediante los cuales los Despachos accionados rechazaron la demanda de «*nulidad relativa de contrato*» que formularon contra Abelardo Bustos Dueñas y Laura Bustos Arévalo, por no haber agotado la conciliación como requisito de procedibilidad, a pesar de que solicitaron el decreto de medidas cautelares.

3. Con el propósito de brindar solución a la controversia memorada, para la Corte resulta necesario verificar los documentos allegados electrónicamente al presente trámite, los cuales permiten apreciar lo siguiente:

3.1. Francisco Javier Sandoval Buitrago, Clara Inés Ruíz Garzón, Milton Javier y Paula Andrea Sandoval Ruíz, aquí interesados, presentaron demanda de nulidad relativa de contrato frente a Abelardo Bustos Dueñas y Laura Bustos Arévalo, con el propósito de que se declarara que los *«demandados actuaron con dolo en la etapa precontractual del proceso de formación del contrato de compraventa de la sociedad denominada Seguridad Y Vigilancia Cien Por Ciento Ltda., el día 28 de septiembre de 2018, al ocultar al comprador de dicha sociedad el estado económico real de dicha compañía»*.

Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se decretara la *«nulidad relativa del contrato de compraventa [referido]»* y la devolución de lo pagado, suma que los allá demandantes afirmaron ascendía a *«\$2.162.356.000.00»*; de otro lado, solicitaron la medida cautelar de *«inscripción de la demanda»* sobre varios inmuebles de propiedad del demandado Abelardo Bustos Dueñas, pues *«existe un peligro en la mora que representaría el trámite total del proceso, dado que, si no se extraen del comercio los bienes, al momento en que se dictare una sentencia favorable, es probable que el demandado los pueda transferir a terceros de buena fe, haciendo que la sentencia no pueda ejecutarse»*.

3.2. El proceso correspondió conocer por reparto al Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, quien en auto del 26 de febrero de 2020 le ordenó a la parte demandante, acá gestora del amparo, que dentro del término de cinco (5) días prestaran *«caución en cuantía de \$432.471.200.00»*, con el fin de garantizar *«el pago de las costas y perjuicios que con las medidas cautelares puedan causarse»*, o en su defecto, que en dicho plazo

acreditaran el agotamiento de la «*conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad*».

3.3. Frente a la anterior determinación, los demandantes, ahora promotores, guardaron silencio.

3.4. Como el extremo activo omitió cumplir con la carga aludida, en proveído del 9 de marzo de la precitada anualidad, el *a-quo* accionado rechazó el libelo inaugural, decisión que fue recurrida en apelación por los demandantes, ahora accionantes; sin embargo, en providencia del 10 de agosto siguiente, el Tribunal Superior de Cali la confirmó íntegramente, y para ello comenzó analizando el contenido y el alcance de los artículos 590 y 621 del Código General del Proceso, los cuales regulan lo concerniente con las medidas cautelares en los procesos declarativos y la conciliación como requisito de procedibilidad en las causas civiles, advirtiendo que «*la solicitud de medidas cautelares que no admitan un tamiz mínimo de razonabilidad y de procedibilidad, así como las que, aparentando ser procedentes, finalmente no constituya la caución necesaria para su decreto, no pueden tenerse como medios idóneos para erigirse como la excepción contenida en el mencionado párrafo primero del artículo 590; por el contrario, **sólo puede asumirse como un método para esquivar el cumplimiento del requisito extrajudicial, esto claro, sin presumir la mala fe de la actuación, pero así se colige de los preceptos a tener en cuenta para la solicitud y decreto de una medida cautelar**, por lo tanto, a juicio de la Sala, no basta impetrar cualquier solicitud de esa índole, por absurda e ilegal que pueda plantearse o que tenga una destinación puramente simbólica, como un camino expedito directo a la administración de justicia, pues esa no es la teleología de la norma en cita*».

Con tal delimitación de la problemática, el *ad-quem* convocado, frente al caso en concreto, estimó que *«impone relieves que la litis puesta a consideración de la instancia judicial (nulidad relativa de contrato mercantil con la consecuente condena en perjuicios), ciertamente, es uno de los asuntos susceptibles de conciliación, por lo cual es requisito para acudir a la jurisdicción civil, acreditar la conciliación previa que contempla el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, modificada por el artículo 621 del Código General del Proceso; en subsidio de lo antepuesto, podría acudirse directamente al juez cuando se solicite la efectiva práctica de medidas cautelares.*

*Para el caso concreto, con palmaria impropiedad el recurrente expone sobre la arista discurrida “que la norma hace referencia a la solicitud no al decreto de la medida cautelar, razón por la cual, en aquellos eventos en los que se solicite la medida cautelar y no se decrete la misma, es procedente que se estudie la demanda y se admita la misma”, tesis que se aparta de la inteligencia que el Legislador estableció en el párrafo primero del artículo 590 del estatuto procesal, en tanto, como ya se expuso en líneas precedentes, no es concebible una vía para relevar el requisito de la conciliación extrajudicial, ya que, si el texto legal pretendiera atenuar la exigencia de la autocomposición, lo habría fijado expresamente como una actuación discrecional, bajo el entendido que cualquier postulante puede pedir la imposición de un gravamen frente a su contraparte.*

*Conforme a las conclusiones expuestas por la Sala, resulta evidente que, desde luego, el objetivo de solicitar las medidas cautelares atendía al solo propósito de prescindir el cumplimiento del requisito en estudio, lo que se acrisola, más aún, con el desdén del gestor para constituir la caución que ordenó suministrar el juez de conocimiento.*

*No se puede soslayar que, desviar la finalidad pública que tiene una norma jurídica en apego de su tenor literal, devela un uso inadecuado de la institución evocada, máxime cuando, con tal derecho,*

*se pretenda justificar la omisión de cumplir la carga propicia para su cabal efecto, entre tanto, las partes deben obrar pródicamente en el juicio, de lo contrario, su cometido estará llamado al fracaso».*

Bajo dicha línea argumentativa, la Colegiatura acusada concluyó, entonces, que *«es acertado que el juez a quo haya rechazado el libelo con la razón esencial de no haber prestado la caución previa para materializar el decreto de la medida cautelar, teniendo en cuenta que, sin ese andamiaje, desnaturalizaría la única excepción para intentar la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, itérese, sin que esta pueda obviarse por argucias ceñidas al estricto contenido literal de la Ley, por consiguiente, si en el sub lite no se supera ese presupuesto jurisdiccional después de prevenirse en el auto de inadmisión, la consecuencia jurídica no es otra que el rechazo, según voces del artículo 90 del Código General del Proceso».*

4. Con vista en lo anterior, se pone al descubierto la improcedencia de la tutela en este específico caso, pues no se observa defecto alguno para dejar sin valor ni efecto las providencias aquí cuestionadas, en la medida en que el Tribunal accionado expuso unas apreciaciones jurídicas y probatorias que no lucen caprichosas o antojadizas.

En efecto, para rechazar la demanda de *«nulidad relativa de contrato»* formulada por los aquí interesados, los estrados judiciales querellados tuvieron en cuenta, de un lado, que la parte demandante había desatendido la carga de prestar caución para garantizar los eventuales perjuicios que pudieran causarse con la inscripción de la demanda en los folios de matrículas de los predios de propiedad de uno de

los demandados; y de otro lado, que como se desconoció esa obligación, dicha cautela, entonces, no podía materializarse, por lo que la solicitud careciera de fundamento, y por contera, no se suplía el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.

Ahora, el Tribunal también concluyó que no bastaba el requerimiento para el decreto y la práctica de medidas cautelares con la finalidad de relevar la satisfacción de dicho requisito, pues la finalidad del parágrafo primero del artículo 590 de la nueva ley de enjuiciamiento civil era, justamente, que los litigantes acudieran preferiblemente a ese medio de autocomposición con antelación al proceso judicial.

5. Se aprecia de este modo, que las valoraciones sobre los puntos materia de discordia, sea cual fuere el criterio de cara a las mismas, no fueron irreflexivas o antojadizas, sino basadas en una ponderación juiciosa de los elementos demostrativos aportados al asunto cuestionado, de la situación respectiva y de las normas llamadas a gobernarla, lo que impide la interferencia del juez de tutela, ya que en lo referente a la interpretación legal y a la evaluación probatoria, no puede inmiscuirse el juez constitucional porque esos precisos puntos pertenecen al contorno funcional de cada administrador de justicia, por tal razón no deben someterse al escrutinio de la acción de amparo, salvo, se reitera, en situaciones de evidente arbitrariedad, circunstancia que en el *sub examine* se encuentra descartada.

Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporación, que *«el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (...) de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisión»* (CSJ STC313-2021).

6. Corolario de lo anterior, se impone negar la salvaguarda instada.

## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley **NIEGA** el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional

para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.

**FRANCISCO TERNERA BARRIOS**

Presidente de Sala

**ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO**

**AROLD WILSON QUIROZ MONSALVO**

**LUIS ALONSO RICO PUERTA**

**OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE**

**LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA**





## SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-00575-00 del 04-03-2022

<b>Emisor:</b>	SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
<b>Sentido del fallo:</b>	NIEGA TUTELA
<b>Número de expediente:</b>	T 1100102030002022-00575-00
<b>Fecha:</b>	04 Marzo 2022
<b>Tipo de proceso:</b>	ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
<b>Número de sentencia:</b>	STC2459-2022

**Id. vLex** VLEX-899888606

**Link:** <https://app.vlex.com/vid/sentencia-corte-suprema-justicia-899888606>

### Texto

Sentencia citada en: [4 sentencias](#)

**LUIS ALONSO RICO PUERTA**

**Magistrado Ponente**

**STC2459-2022**

**Radicación n° 11001-02-03-000-2022-00575-00**

(Aprobado en sesión del dos de marzo de dos mil veintidós)

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por **Hugo Hernando Solarte Potes y S.M.S.C.** contra la **Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto.**

## ANTECEDENTES

1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al disponer el rechazo de la demanda radicada bajo el nº 2021-00105.

2. En síntesis, se extracta que H.F.S.P., como víctima directa de un accidente de tránsito ocurrido el 5 de agosto de 2016, y Sandra Milena Suárez Cifuentes, como su compañera permanente, actuando a través de apoderado judicial, el 30 de julio de 2021 promovieron «*demanda de responsabilidad civil extracontractual y nulidad de contrato*» contra J.H.C.H., Juan Carlos Coicue Salazar, Cooperativa de Transporte Etnias de Colombia S.A. y QBE Seguros S.A.

Que la acción tuvo lugar porque «*el 8 de agosto de 2016, cuando [Hugo Fernando Solarte Potes] [s]e encontraba en el hospital*», el señor C.H. «*[l]e solicitó que firmara un documento con el objetivo de retirar el vehículo del parqueadero de bomberos y así evitar que fuera trasladado a los patios de tránsito (...), empero, en realidad dicho documento era un “contrato de conciliación mutua de accidente de tránsito” donde se estableció que H.S. “transaba”, por lo que “desistía” de cualquier acción legal como consecuencia del siniestro*».

Que en razón a «*las omisiones*» en el «*informe policial de accidente de tránsito*» y por carecer de acompañamiento jurídico, «*la denuncia por lesiones personales [ni] el requerimiento ante las entidades competentes (...), debí yo como víctima [y] tras una recuperación de años, larga y dolorosa (...) apersonar[me] de la investigación*»; del mismo modo, «*el mencionado contrato de conciliación (...) me llevó a un error durante varios años [al considerar que] había perdido las posibilidades de hacer exigible el resarcimiento de los perjuicios que me fueron ocasionados*», lo cual solo realizó «*apurado por la prescripción extraordinaria, pues estaban por cumplirse 5 años desde la ocurrencia del siniestro*».

Que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto inadmitió la referida demanda con auto del 15 de septiembre del mismo año, por «*más de 10 causales*», y para subsanarla la presentaron «*reconstruida en su totalidad*»; no obstante, el despacho encartado, «*mediante auto interlocutorio No. 34 del 17 de noviembre de 2021, dispuso rechazar[la] (...), pues a [su] juicio no*

*se subsanó en debida forma, comoquiera que el cuaderno de medidas cautelares incluía la solicitud de 1 medida improcedente (...).*».

Que, recurrida y apelada la anterior determinación, la misma fue ratificada por las autoridades acusadas el 6 de diciembre de 2021 y 12 de enero de 2022, respectivamente, incurriendo con ello en *«defecto procedimental por exceso ritual manifiesto»*, porque *«si bien existió un error formal en la palabra empleada en el escrito de medidas cautelares al solicitar “un embargo y secuestro” cuando correspondía [a] la “inscripción de la acción”, [esto] no es óbice para que el juzgado en buen uso de sus facultades constitucionales adecue la solicitud a lo que procede»*.

3. Pretenden, que por esta vía *«se revoque [el] auto 34 del 19 de noviembre de 2021 y [el] 37 del 6 de diciembre de 2021 del Juzgado 1 Promiscuo del Circuito de Caloto, así como la decisión de la Sala Civil [del] Tribunal Superior del Cauca (sic) del 12 de enero de 2022, y en consecuencia se ordene (...), admitir la demanda declarativa»*.

## RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El magistrado ponente de la decisión fustigada, se opuso a la acción, aduciendo que con ella los actores pretendían *«utilizar este mecanismos subsidiario y residual como una instancia adicional lo que hace evidente su improcedencia, aunado a que no es dable predicar ninguno de los defectos que contempla la jurisprudencia para la prosperidad de la tutela en contra de providencias judiciales»*, y sin más pronunciamientos, se remitió a los argumentos contenidos en el auto del 12 de enero de 2022.

2. El Juez Promiscuo del Circuito de Caloto, expresó que *«no existe vulneración de los derechos fundamentales [invocados]»*, toda vez que la providencia emitida por su despacho *«no es una decisión arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra preceptivas legales que rigen el respectivo proceso (...), sino que por el contrario, como se indicó en las providencias atacadas (...), encuentran sustento en pronunciamientos de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que ha precisado que ante la solicitud de medidas cautelares improcedentes en los procesos declarativos, las mismas no pueden ser reemplazadas como requisito de procedibilidad de la audiencia prejudicial de conciliación»*. Por tanto, *«la exigencia del agotamiento de la conciliación (...) no configura un exceso ritual manifiesto»*.

3. Jorge Alberto Moreno Celis, quien dijo actuar *«en mi calidad de abogado y partícipe oculto dentro del contrato de cuentas en participación suscrito con el Sr. H.S., S.C. y C.B.»*., manifestó su intención de *«coadyuvar la acción de tutela»*.

4. Carlos Augusto Buriticá Mejía, informó que como abogado, acerca del litigio emprendido por el señor S. con ocasión del accidente de tránsito de que fue víctima, *«di algunas pautas a seguir, como era la reclamación directa ante la Aseguradora QBE, y la acción penal ante la Fiscalía de Caloto que aún sigue conociendo del caso»*, y, entre otras situaciones, dijo que *«ningún abogado se le medía a llevarle el caso por la situación de orden público que se presenta en la zona y aun así le colaboré acompañándole en tres oportunidades a la Fiscalía de Caloto a fin de realizar audiencia de conciliación con el señor que conducía el vehículo de transporte público que le ocasionó el accidente, pero nunca se presentó»*.

## CONSIDERACIONES

### 1. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popayán, vulneró las prerrogativas fundamentales de los accionantes, al confirmar el rechazo de la demanda que ellos promovieron radicada bajo el n° 2021-00105, o si por el contrario esa decisión obedece a un criterio jurídicamente razonable.

Esto, porque si bien la acción se dirigió también contra lo resuelto por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto, el análisis se circunscribirá a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definición del caso acá debatido, puesto que *«es inane detenerse [al análisis de la providencia inicial cuando ésta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoración sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada»* (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en [STC3028-2020, 18 mar. 2020](#), rad. 2019-04162-00).

### 2. De la tutela contra providencias judiciales.

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos [228](#) y [230](#) de la Carta Magna, al juez [constitucional](#) no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

De igual forma, cuando se trate de una irregularidad procesal, es indispensable ésta sea determinante en la decisión; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración, y que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela. Finalmente, que se haya configurado algún defecto de orden sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, se trate de resolución sin motivación, se haya desconocido el precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constitución.

### 3. Del caso concreto.

De la revisión que la Sala realiza a la queja constitucional y con observancia en los informes y piezas procesales adosados al expediente, se denegará el amparo implorado, porque la actuación censurada no constituye defecto específico con la fuerza suficiente para quebrantarla.

Lo anterior, porque para que mediante proveído del 12 de enero de 2022 el tribunal accionado hubiera confirmado el rechazo de la demanda incoada por los hoy tutelantes, se valió de una motivación que lejos está de tornarse arbitraria o caprichosa, por tanto, no constituye desafuero que amerite su corrección a través de este mecanismo excepcional.

En efecto, tras advertir que la inadmisión se produjo, entre otras falencias, porque el juzgado exigió «*que se indicara cuáles son las medidas cautelares que pretende se decreten, y los bienes sobre los cuales recaen, o en el evento de desistir de dichas cautelas, acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad (arts. 35 y 38 de la [Ley 640 de 2001](#))*», ante lo cual los demandantes precisaron que tales medidas referían a «*el embargo y retención de sumas de dinero [depositadas en cuentas bancarias]*», así como «*el embargo y secuestro [de las sociedades enjuiciadas]*», el tribunal encontró acertada la decisión proferida por el *a-quo* el 17 de noviembre de 2021, en el que la demanda se tuvo por no subsanada.

El pronunciamiento que en su momento realizó el juez de la causa, se concretó en que «la solicitud de medidas cautelares improcedentes en los procesos declarativos, las mismas no pueden ser reemplazadas como requisito de procedibilidad de la audiencia prejudicial de conciliación», y para ello citó como precedente la sentencia [STC3028-2020](#) del 18 de marzo de 2020 (rad. 2019-04162-00), en la que esta Corporación encontró razonable el rechazo de una demanda, porque para obviar el requisito de procedibilidad consagrado en el [artículo 38](#) de la

[Ley 640 de 2001](#), modificada por el [artículo 621](#) del [Código General del Proceso](#), se habían deprecado medidas cautelares «*inviabiles*».

En ese mismo sentido y ahondando en jurisprudencia de esta Sala, mediante la providencia criticada, la colegiatura acusada expuso los siguientes razonamientos:

*«Se podrá prescindir de la comentada exigencia, cuando se manifieste bajo la gravedad de juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero (inciso 40 [art. 35 Ley 640 de 2001](#)), o en el caso de solicitarse la práctica de medidas cautelares que resulten procedentes (parágrafo 1 [art. 590 C.G.P.](#))».*

*Sobre este último tópico ha precisado la Corte:*

*"(...) si bien es cierto que el parágrafo del reseñado canon establece que «en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad», también lo es que, como se dijo en un caso de similares contornos, «**el juez, como director del proceso, debe verificar que la medida solicitada sea PROCEDENTE que sea necesaria para evitar la vulneración o amenaza del derecho, que sea proporcional, y que además sea efectiva para el cumplimiento del fin previsto**» ([CSJ STC15432-2017](#)), tarea que efectuó el Tribunal accionado.*

*(...) Frente a este preciso tópico, esta Sala, tuvo la oportunidad de señalar que: «(...) **tomando en consideración la improcedencia de la memorada cautela, tal petición en la demanda no sustituía el requisito de la conciliación** pues «(...) **no es la sola solicitud de medida y práctica de medida cautelar**. Ella debe estar asistida de vocación de atendimento, es decir que sea procedente, porque aceptarlo de una forma diferente daría al traste con el aspecto teleológico de la norma, puesto que bastaría solo predicar el pedimento asegurativo para evitar el escollo de la conciliación previa (...)».*

*De esa manera, advirtiendo la ausencia del aludido presupuesto de procedibilidad, dispuso revocar lo actuado en ese litigio y, en su lugar, "(. . . disponer el rechazo de la demanda, por ausencia del requisito de procedibilidad que conduce a la falta de competencia (...))".*

*Las conclusiones adoptadas son lógicas, de su lectura no refulge vía de hecho, el Tribunal efectuó una juiciosa valoración que le llevó a rechazar de plano ese libelo, cimentado en la*



*regla 36 de la [Ley 640 de 2001](#); por lo tanto, no es posible reabrir un debate fenecido cuestionando el estudio realizado por el juez ordinario, pues este mecanismo no es una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ([CSJ STC10609-2016](#))» ([CSJ STC4283-2020, 8 jul. 2020, rad. 2020-01343-00](#))».*

Bajo tal perspectiva, dijo que en el asunto en cuestión:

*«(...) la parte actora no acreditó el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, pues la constancia emitida el 21 de noviembre de 2017 por la Asistente de Fiscal en el marco de una investigación penal, de no comparecencia del señor J.C.C. a la audiencia de conciliación ahí programada no satisface tal exigencia, en la medida que tratándose de un asunto de competencia de los Jueces Civiles, dicha audiencia debía intentarse ante los funcionarios que prevé el [artículo 27](#) de la [Ley 640 de 2001](#), entre los que no se hayan los servidores de la Fiscalía General de la Nación, aunado que tampoco obra prueba de la citación efectuada a todos los aquí demandados ni el motivo de esa convocatoria contrastable con las pretensiones debatidas en este proceso.*

*(...) Ante ese escenario, como las cautelas rogadas resultaban improcedentes por ser aquellas propias de los juicios ejecutivos ([art. 599 C.G.P.](#)), acorde con el precedente citado líneas atrás, razón le asistió al funcionario de primer nivel al rechazar la demanda, toda vez que tal petición no exoneraba al extremo activo de agotar la conciliación previa como requisito de procedibilidad en esta acción declarativa, y en ese orden, se responde afirmativamente el problema jurídico propuesto, lo que conlleva a confirmar la decisión atacada».*

Como acaba de verse, no se advierte una amenaza o vulneración a la garantía esencial invocada por los accionantes, en tanto que la providencia reprochada no revela arbitrariedad o desmesura, sino una divergencia conceptual cuya razonabilidad torna inviable la salvaguarda. Ello, porque al analizarse la excepción para agotar la conciliación extrajudicial en juicios declarativos cuando para ello se solicitan medidas cautelares, a tono con la jurisprudencia de esta Corte, encontró que para el caso *sub júdice* éstas no eran procedentes, y con ello, que ciertamente el requisito echado de menos por el juzgado al calificar la demanda, no había sido satisfecho.

Así las cosas, la actuación censurada no constituye una vía de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, por cuanto los razonamientos contenidos en la decisión cuestionada, hacen parte de los principios de autonomía e independencia judicial que inhiben al fallador del amparo para inmiscuirse en el asunto, imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al juez de conocimiento, pues es claro que la tutela no es un mecanismo alternativo sino un instrumento excepcional y residual.



En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situación que no ocurre en el *sub lite*, comoquiera que este remedio «*no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo*» (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC976-2022, 3 feb. 2022, rad. 00535-01).

Nótese que lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al de las autoridades judiciales convocadas, y reprochar, por esta vía, la decisión que los desfavoreció, finalidad que resulta ajena a la de la acción de tutela, pues esta no fue establecida para erigirse como una instancia más dentro de los juicios ordinarios.

#### 4. Conclusión

Por lo discurrido en precedencia, se desestimaré el resguardo invocado, toda vez que la determinación criticada, no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse a través del presente mecanismo excepcional.

#### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **NIEGA** el amparo solicitado a través de la presente acción.

C. lo acá resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**HILDA GONZÁLEZ NEIRA**

Presidente de Sala

**ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO**

**MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ**

**AROLD WILSON QUIROZ MONSALVO**

Con Salvamento de Voto

**LUIS ALONSO RICO PUERTA**

**OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE**

Con Salvamento de Voto

**FRANCISCO TERNERA BARRIOS**

## **SALVAMENTO DE VOTO**

**Radicación nº 11001-02-03-000-2022-00575-00**

Con el respeto de siempre, nos permitimos expresar los motivos de nuestro disenso con la providencia aprobada por la Sala mayoritaria.

En nuestro criterio, es irrazonable sostener que, si una medida cautelar solicitada no es procedente, se debe exigir el intento fallido de la conciliación extrajudicial en derecho y, en el evento en que este no se acredite, sea rechazada la demanda. No en vano, en reciente pronunciamiento mayoritario de esta Sala, se consideró que «la regla general impone al demandante intentar la conciliación previa al proceso, y la excepción a dicha pauta, por

disposición legal, tiene lugar con la ***solicitud de medidas cautelares que acompañe al libelo inicial***» (negrillas de ahora), conclusión a la que se arribó luego del análisis constitucional y legal de los respectivos preceptos que gobiernan la materia. Razonamientos que reproducimos en esta ocasión, pero que, por honor a la brevedad, remitimos al lector a lo sostenido en [CSJ STC16804-2021](#).

En los referidos términos dejamos consignada nuestra discrepancia.

Fecha, *up supra*.

**OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE**

**AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO**